

Jorge Alonso

*Centro de Investigación y
Estudios Superiores en
Antropología Social,
Occidente
CIESAS – Occidente*



LAS CONTRADICCIONES GOBIERNO – SOCIEDAD

El telón de fondo de los desastres de abril ha sido el abismo abierto entre gobernantes y pueblo. La cúpula tapatía confundió interesadamente partido, Estado y negocios privados. Las explosiones de Guadalajara constituyeron el eco de otro estallido, fundamentalmente social y político, todo lo cual mostró un gobierno en descomposición.

LARED En el Foro Académico el equipo encargado de analizar la situación política de los acontecimientos del 22 de abril en Guadalajara y que estuvo constituido por María Eugenia de Alba, Luz Lomelí, Mario Saucedo, Humberto González y Jorge Alonso. La recopilación de datos, la discusión y análisis de los mismos se fue haciendo de manera colectiva. Posteriormente se elaboraron tres artículos. Luz Lomelí abordó lo relativo a gobierno y sociedad civil ante la explosión, Humberto González se centró en la actuación del ayuntamiento tapatío y Jorge Alonso presentó el contexto político de la desgracia.

De la imantación de un panista norteño a las expectativas frustradas de un político tradicional lugareño

De 1988 a 1991 hubo profundos cambios en el comportamiento electoral de la ciudadanía jalisciense. En julio de 1988 un 30% votó a favor del PAN, un 23% mostró sus preferencias neocardenistas y el resto permaneció bajo el control del PRI. Pero estas proporciones no tuvieron una expresión homogénea en todo el estado. La mayoría de las diputaciones de la zona metropolitana quedaron en manos de panistas. Unos meses después la ciudadanía abandonó el empuje electoral y dejó que una gran abstención permitiera la llegada al gobierno de Cosío, quien era esperado por las élites tapatías. Éste pronto cerró su círculo al cual privilegió, y excluyó a muchos que habían puesto en él sus esperanzas. Aunado a este quiebre intercúpular se fue ahondando una separación entre el gobernante y el pueblo. Ante el abuso de la familia Cosío se consolidó el convencimiento de que hacer negocios prioritariamente y en segundo lugar gobernar no era un "habitus" político permisible por la sociedad. La hegemonía política y de los negocios públicos se concentró en la familia de Cosío y sus allegados. Importantes empresarios fueron enfriando y aun rompiendo sus relaciones con el gobierno de Cosío.

El cansancio de un mal gobierno

Para que en el centro de la República se viera que los priistas jaliscienses eran solícitos

en la tarea de contribuir a disminuir la oposición y garantizar una Cámara dócil para los planes presidenciales, en las elecciones federales de 1991 Cosío se mostró especialmente dedicado a aplicar las medidas centrales para conseguir gran cantidad de votos lícitos y sobre todo ilícitos. No obstante, el gusto le duró poco. En febrero de 1992 un periodista local publicó en una revista de alcance nacional la lista de los principales negocios que se le imputaban a Cosío, sobre todo en los municipios costeros. Se produjo un hecho de revelación paradójica. Previamente todo eso era conocido en corrillos; al pasar a los medios impresos cobró una dimensión no controlable. La sociedad tapatía, acostumbrada a decir las cosas en secreto y a aparentar que en Guadalajara no pasaba nada, terminó por cansarse. El descontento soterrado, al conjuro de la letra de molde de los medios de comunicación, afloró. Lo que podía haberse circunscrito a sectores de las cúpulas empresariales, alcanzó a amplias capas ciudadanas que estaban sufriendo las arbitrariedades del monopolio de la verificación vehicular. En este contexto de malestar, un policía dio muerte a una joven de clase acomodada, al parecer en un frustrado asalto. Esto colmó con creces el recipiente que ya estaba a punto de derramarse. Muchas madres de familia de "la alta sociedad" se organizaron para realizar una manifestación silenciosa que se denominó de las madres de luto. A ellas se sumaron madres de clases medias y aun bajas. Querían expresar su descontento por el mal gobierno. Exigían seguridad, que se pusiera alto a la ola de violencia constante e incontenida. La marcha fue impactante. El gobierno no acertó a reaccionar sino con dos medidas: intentar amedrentar a las que se ubicó como principales participantes y perseguir fiscalmente a sus maridos. Esto avivó aun más el fuego anticosíista.

Las arbitrariedades del grupo de Cosío que tenía en el magisterio un bastión considerado como propio, aunadas a la situación de deterioro salarial irrumpieron en masiva impugnación. Una multitudinaria concentración de maestros estatales demandaron aumento de sueldos. Fue aprovechada esa manifestación para lanzar consignas en contra del gobernador. Cosío de nuevo no supo sino recurrir a la amenaza.



El gobierno de Cosío confundiendo al máximo partido y Estado no acertó a lograr concertaciones, hostigó a los principales opositores internos priístas e impuso el autoritarismo. Esto se profundizó con las nominaciones de los candidatos locales para las elecciones de 1992. Los familiares de Cosío vendieron candidaturas impopulares. La concentración de las designaciones para puestos electorales en preferidos por el grupo de Cosío terminó por romper consensos que tradicionalmente existían en el partido del Estado. Sobrevinieron desprendimientos, y hubo unas elecciones muy impugnadas. El descontento creció y las elecciones locales constituyeron un golpe para el gobernador. El PRI reconoció la derrota en 18 de los ayuntamientos, pero tuvo problemas en más del doble. El gobernador, en lugar de resolver conflictos, quiso apaciguar con concesiones menores a los partidos opositores, lo cual sólo aplacó a los del PFCRN pero no amainó sino exacerbó los ánimos de panistas y perredistas, que exigían que los presidentes municipales oficialmente reconocidos en el alteño Tepatlán y en el costeño Cihuatlán fueran destituidos. Como anteriormente ya se había negado a ceder posiciones electorales a otros titulares del gabinete presidencial, Cosío consideró que tenía fuerza suficiente para desconocer pactos entre opositores y la Secretaría de Gobernación.

Obras públicas realizadas por los allegados a Cosío y a su compadre Dau, al que había sacado adelante como alcalde de Guadalajara en 1992 fueron cuestionadas. Las protestas por los fraudes electorales como por la falta de seguridad pública subieron de tono. Cosío trató de revestir este desprestigio prometiendo que se abrirían otras concesiones de verificación vehicular además de la que estaba en

manos de un monopolio controlado por el recién instalado vicepresidente municipal. Importantes representantes de la iniciativa privada habían acudido con Córdoba, quien fungía de facto como un vicepresidente de la República, para solicitar el cambio de gobernador. No obstante, Cosío logró en parte amainar el encono de algunos empresarios. El gobernador buscó afianzarse en el núcleo de agraciados con concesiones de obras estatales y en los grupos sindicales corporativizados. Se centró en la interpretación del complot, y apostó a la apatía de las masas para sentirse seguro en proseguir su gestión sólo con algunos remiendos. No obstante, el nepotismo, la corrupción, el predominio de una élite que se fue estrechando en sí misma, los fraudes, la falta de seguridad pública ante los ajustes de cuentas sangrientos entre narcotraficantes y lavadólares y ante una criminalidad incontenible hizo crisis. Existía la confianza en una paciencia a toda prueba en una entidad en la que una cultura política había llevado a que lo que pasaba se percibiera como sucediendo en el subsuelo sin que llegara a aflorar. El cosiísmo se creía inamovible e impune. Los apoyos en la familia del Presidente de la República se veían como una salvaguarda de cualquier descontento ciudadano. Sin embargo, el acuerdo cupular instituido desde González Gallo había sufrido rupturas.

En los meses precedentes a las explosiones cuatro elementos se combinaron para que el cuestionamiento al cosiísmo se profundizara: el descontento por la concentración de los beneficios de la administración; el repudio a la falta de seguridad pública; el reto al control cosiísta sobre el gremio de educadores; y un extendido reclamo en contra del fraude electoral. Un gobierno percibido cada vez



más como corrupto fue repudiado y se dudó que además tuviera capacidades frente a los problemas que se multiplicaban, de los cuales en muchos resultaba directamente responsable.

Las explosiones: el estallido de un gobierno en descomposición

Cosío respondía con la amenaza frente a las manifestaciones de desasosiego social y político. No era capaz de entender los rompimientos que su gestión estaba provocando entre la iniciativa privada, entre capas antes nada activas de la sociedad como amas de casa de familias adineradas, entre trabajadores y entre partidos políticos incluido el mismo PRI. Como alguien que cuida su presa, Cosío interpretaba que se trataba de una confabulación en contra suya, su puesto y los beneficios que estaba disfrutando. Con las explosiones del 22 de abril el cosíato se hundió. No acertó a encarar un desastre en el que el gobierno era el culpable.

Uno de los datos que quedó sin dilucidar fue el relativo al número de muertos. La cifra dada por el gobierno no fue creída. Los testigos tenían la percepción de una gran cantidad de cuerpos destrozados que el gobierno no contabilizaba oficialmente. Cada casa perdida representaba un hogar, una historia de una familia con sus afectos, sus recuerdos, sus bienes adquiridos a través de años de trabajo y esfuerzo familiar. No sólo fueron dañadas calles y casas. Se destruyó en parte un barrio con mucha historia.

Lo primero que resaltó ante la tragedia evitable fue la discrepancia entre la federación y el gobierno estatal. El primero desplazó a los gobernantes locales y

prometió que en 72 horas la población sabría las causas y los responsables del desastre. Por su parte el gobierno local intentó centralizar la copiosa ayuda que empezó a llegar. Intentó reprimir a la población civil que solidariamente quería organizar centros de acopio y distribución de ayuda. También pretendió centralizar y controlar a los damnificados. En el organismo ideado por el cosíato para enfrentar las tareas de la reconstrucción a los afectados se les colocaba en último sitio, con poca representación y mediados por la burocracia del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Damnificados organizados independientemente se opusieron a esto.

El dictamen de la Procuraduría General de la República no convenció. Había la sensación generalizada de que quería encubrir a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a Cosío. Pese a todas las presiones de diputados, ciudadanos y organismos civiles, el dictamen final de la Procuraduría entró en una etapa de congelamiento político que ha suscitado mayores desconfianzas hacia su formulación.

Las fisuras en el programa máspreciado del salinismo

El PRONASOL, que se ha presentado como un programa para enfrentar la extrema pobreza, fue tratado de utilizar para mediatizar a los damnificados. Hubo una confrontación entre las burocracias federal y estatal de este programa. Finalmente los afectados demandaron y lograron que PRONASOL saliera del marco de las indemnizaciones y de la pretendida reconstrucción. No obstante, PRONASOL fue el instrumento para trampear tanto la representatividad de los afectados en el patronato como para que su demanda



central de reconstrucción quedara limitada sólo a una burocrática indemnización.

El descrédito partidario

La sensación de la mayoría de los afectados hacia el partido del Estado fue de rechazo.

El PRI recibió todo el descrédito gubernamental. Ante esto las autoridades se empeñaron en impedir que los partidos opositores enarbolaran las causas de los afectados y lograron inhibirlos. Por su parte, hubo organización de damnificados al margen de los partidos y con cierta desconfianza ante éstos.

Corrupción e ineficiencia

Las explosiones acentuaron conflictos existentes y desencadenaron una crisis política en la capital jalisciense. Se acusó al gobierno local de negligencia criminal, de ineptitud para gobernar, de nepotismo y de pretender utilizar la tragedia en beneficio propio. La no renuncia del gobernador

Cosío sino su licencia temporal y el no haber sido involucrado en el informe de la Procuraduría se explican por la decisión impositiva desde el centro. La asunción de un interino también dependió de la voluntad presidencial y no de la intervención de la voluntad ciudadana. El congreso local quedó supeditado a las decisiones del ejecutivo. Uno de los

descréditos que también acarreó el PAN fue su decisión dividida ante la imposición del interino. Cuatro de los siete diputados panistas estuvieron de acuerdo con la designación de Rivera. Después habrían de lamentarlo. El gobernador interino, ligado al cosíato, aunque intentó nuevas formas iniciales, pronto cayó en lo que el mismo Cosío no había llegado: en la represión a damnificados inconformes.

Los acontecimientos de abril de 1992 pusieron al desnudo el autoritarismo gubernamental. Las explosiones desconcertaron a un ayuntamiento que acababa de entrar en funciones. El Presidente Municipal venía de una dispendiosa campaña en la que parecía que había jugado por la gobernación. Muchos compromisos se habían establecido y redes de corrupción se habían reforzado. Dau había llegado a la presidencia de Guadalajara vía la imposición de Cosío de quien era compadre y co-socio importante en muchos negocios. En el sector Reforma muchos habitantes habían dado voz de alerta ante las emanaciones de gases. El municipio no había acertado a enfrentar la situación de peligro. Para salvarse, el gobernador inculpó a su compadre, y éste fue a dar a la cárcel. No obstante todos los compromisos económicos adquiridos se intentó salvarlos, pues el PRI no quería romper los lazos establecidos en la campaña. Descabezado el ayuntamiento entró en total inactividad. Tuvo que ser reemplazado. De nuevo el método fue centralista, cupular antidemocrático y atendiendo a compromisos del más viejo cuño corporativista. La constitución del Concejo Municipal fue calificada como una farsa política. Todos los excluidos en el cosíato con la recomposición del gobierno estatal y municipal encontraron reacomodo

La antidemocracia

No hubo democracia en todo el tratamiento del problema de las explosiones y en sus consecuencias. Imperó el presidencialismo, la ausencia del respeto al pacto federal y el centralismo. El papel de los ciudadanos se redujo a la presión ejercida a través de las expresiones de indignación popular, por las movilizaciones y por organizaciones incipientes de

afectados y de ciudadanos que les ofrecieron su apoyo.

No obstante, actores importantes ante esta desgracia fueron numerosos grupos de la sociedad civil. Se crearon agrupaciones de solidaridad y de apoyo a los afectados.

En el proceso de entrega de las indemnizaciones campearon actitudes patrimonialistas. Se dejaron muchas cuentas pendientes, tanto en la responsabilidad de las explosiones como en la dilucidación de la responsabilidad de la represión a afectados.

El autoritarismo

Los gobiernos autoritarios subestiman a sus ciudadanos. Confían en que sus responsabilidades no cumplidas o sus culpabilidades no les sean reclamadas. Ante la aparición de las protestas civiles apuestan al desgaste y al olvido. Esperan que el tiempo pase sobre los descontentos para que se arrinconen los reclamos, para que el cansancio de paso a amnesias colectivas, para que las protestas se pudran en aporías. Pero sólo el olvido de los gobernantes pudre su poder, porque la sociedad puede soterrar sus experiencias amargas para hacerlas emerger cuando menos lo esperan los poderosos. A casi seis meses después de las explosiones y cuatro y medio del violento desalojo de damnificados de la Plaza de Armas no hay aclaración de los hechos ni se señala a los verdaderos culpables.

Para diputados, afectados y organismos civiles de apoyo la falta del dictamen y la no aclaración pública sobre la represión constituían una táctica dilatoria para que los afectados, cansados y ya con indemnizaciones desistieran de sus impugnaciones. Los gobernantes pretendían que el olvido cubriera responsabilidades gubernamentales y los verdaderos culpables

quedaran a salvo. Esto fue considerado por algunos como una afrenta a la sociedad. Empezó a correr el rumor que la Procuraduría no quería inculpar ni a PEMEX ni al gobernador con licencia Cosío, y que pretendía "congelar" el caso. Una acusación oficial a este último implicaría el que presentara su renuncia, situación que obligaría a realizar elecciones extraordinarias. El caso de PEMEX ante su reestructuración y de cara a las recientes negociaciones del TLC también resultaba delicado para el régimen. Para diputados estatales y federales opositores el retraso se debía a razones no técnicas sino políticas. Declararon que tanto la PGR como PEMEX no habían cumplido con los compromisos adquiridos con los diputados en torno a la investigación de ese caso.

A principios de octubre se tuvieron que desalojar 24 manzanas del centro de la ciudad de Guadalajara debido a un alto índice de explosividad. Pocos días después un derrame de gasolina en el drenaje del Distrito Federal obligó a que se suspendiera el servicio en siete estaciones de una línea de metro. A las pocas horas de este suceso tuvieron que desalojar a varios cientos de vecinos en la ribera del lago de Chapala debido al incendio en una gasera. Los peligros no sólo no han sido conjurados sino que se multiplican. La acción gubernamental no va al fondo de los problemas. Ineptitudes, corrupciones, complicidades y ocultamientos persisten.

Hasta el 14 de octubre, día mundial de la reducción de desastres, no había un dictamen fidedigno de lo acontecido el 22 de abril. Pese a las declaraciones de los diputados que repetidas veces han presionado por su publicación todavía sigue a la sombra. La Contraloría quisiera centrar todo en cuatro funcionarios de menor rango





en PEMEX. Por su parte el Instituto Mexicano del Petróleo insiste en que las primeras explosiones no se debieron a derrame de gasolinas en el colector sino a desechos de talleres y fábricas que se acumularon, situación en la que contribuyó un sifón de la línea 2 del tren ligero, obra de Cosío y de Dau. También el peligro que obligó a evacuar en octubre se achaca a esos últimos factores. Pero a ciencia cierta todavía no había un dictamen creíble. Miembros de la coordinadora 22 de abril exigieron que se formara una comisión de ciudadanos probos, responsables y con conocimientos técnicos para que, de cara a la ciudadanía, emitiera tanto un dictamen de lo acontecido como recomendaciones para el futuro. A casi medio año de la tragedia no había soluciones adecuadas para remediar esta clase de desastres. Los primeros días de octubre el PAN amenazó con presionar a través de medidas de resistencia civil para que se diera el dictamen. Pero hasta la fecha no se han visto esta clase de acciones. El PRD también se pronunció en el sentido de que no tenía por qué haber más tragedias en Guadalajara. Exigió información inmediata y veraz de las causas del derrame de hidrocarburos de octubre y que no se ocultara por más tiempo el dictamen final del 22 de abril. Ante una situación que parecía haría reversible la promesa presidencial de la reubicación de la planta de PEMEX, demandó que dicha promesa se cumpliera. Y por lo pronto se siguen sumando nuevos damnificados a causa de las explosiones. En la colonia Alamo Industrial, después de que se succionó agua con gasolina derramada por PEMEX empezaron a aparecer hundimientos y cuarteaduras en más de 280 viviendas. La AJDH se ofreció para asesorar a los colonos. Los afectados no están de acuerdo en que se diluyan las responsabilidades.

El gobierno apostó a que el tiempo borrara los malos recuerdos, a que las afrentas gubernamentales hacia la sociedad se sepultaran por el cansancio. La táctica de haber desviado la atención hacia una indemnización y haber dejado la reconstrucción sólo en el aspecto del colector y no en el concerniente al barrio dio iniciales resultados al poder, puesto que la sociedad entró en una especie de sopor al respecto. Muchos afectados habían aceptado la situación y se disponían a emprender su vida de acuerdo a las nuevas circunstancias que habían configurado las indemnizaciones. Los entusiastas organismos civiles de apoyo iniciales se habían reducido y hasta entrampado en contradicciones internas. La tormenta parecía haber dejado el lugar a esa calma de la cultura política tapatía para la cual nada pasaba, o lo que sucedía se olvidaba pronto. El desgaste era evidente, la recomposición del poder y su impunidad también. No obstante, la tragedia dejó huella. Existe además una latencia de los movimientos sociales que se sumergen en la vida cotidiana después de grandes desgastes, lo cual permite que se sedimenten las experiencias, se asimilen, para que después broten nuevos movimientos con fuerza cuando menos se los espera.

Las explosiones del abril de 1992 en Guadalajara marcaron a varios sectores sociales. Hubo un despertar de conciencia ciudadana tanto entre los afectados como en muchos otros núcleos. La zona del desastre había sido apático políticamente, sujeta a los votos corporativos de la CROC. Las explosiones indujeron actividad política no partidaria sino cívica. Se iniciaron tentateos de organización ciudadana que reclamó respeto a su constitución. En su novatez confundió las tácticas con la



estrategia; pero influyó en que el proceso no fuera tan brutal y más tramposo en contra de los afectados.

Aunque hubo un importante resquebrajamiento del poder tradicional en la región, éste ha ido recuperando terreno. Las cúpulas volvieron a sus tratos habituales. A su vez exigieron que la sociedad se comportara como si nada hubiera ocurrido. Ha proseguido el patrimonialismo como cultura política del poder. Hubo imposición centralista con cierto rejuego y negociaciones de grupos elitistas. La ciudadanía estuvo marginada en todas esas decisiones. Se encontró ante un gobierno al que nunca eligió ni formalmente. Este, en la inercia del cosíismo siguió interpretando cualquier actuación independiente como revuelta, y la defensa de derechos como desestabilización. El poder no está acostumbrado sino a la corporativización y neocorporativización y no a la movilización ciudadana. Esta le ha nublado aun su percepción de los partidos políticos. Los de oposición en la localidad, más allá de la paranoias gubernamentales, estuvieron más como simples testigos con capacidad de protesta verbal.

Uno de los grandes ausentes en todo este episodio ha sido la democracia. Cada día se hace más evidente que los afectados de las explosiones del 22 de abril han sido víctimas de un sistema antidemocrático. No obstante, ya no es posible un simple reacomodo elitista que recomponga la antigua dominación, sin más. Si antes era la opción de las cúpulas la única que contaba, surgieron contrapartes y contrapesos que se han ido configurando. Se les quiere desatender, se les desgasta; pero ya hay signos de sus posibilidades de acción. Pese

a los esfuerzos de las élites tradicionales, se manifestó un movimiento cívico que se esforzó por colocar la dignidad y los derechos por delante. Las maniobras del poder prosiguieron en cuanto a tratar de impedir que las demandas de los afectados que se organizaron con independencia prosperaran. Inicialmente se aparentó que se les aceptaban algunas propuestas, pero a la hora de las acciones lo prometido se empequeñeció. La presencia de la actividad de los damnificados molestó a un dominio acostumbrado a negociaciones cupulares. Ha habido no sólo insensibilidad, sino incapacidad para tratar organizaciones cívicas. Primero se maquilló la dominación con cierta apertura, para después ejercer la fuerza. Las autoridades apuestan al desgaste, al miedo y al desánimo. Pero no tienen la percepción de lo que son capaces este tipo de movimientos civiles, de que sus latencias no significan su desaparición total. Encima del daño, los afectados se vieron arrojados a una burocracia engorrosa, pesada y tramposa. A los menos dóciles se les hizo probar la represión. El nuevo gobierno cayó en los mismos esquemas que habían conducido al anterior a graves problemas de gobernabilidad y credibilidad.

Se evidenció un contraste entre una solidaridad usurpada y espuria (que es la costosa burocracia gubernamental orientada a la confusión de los ciudadanos, a su control y a la ruptura de liderazgos naturales) y una auténtica solidaridad entre ciudadanos, que pese a problemas, es desinteresada y que entró en un difícil pero importante aprendizaje en cuanto al respeto del ritmo y de las decisiones de los afectados. Los ciudadanos tienen delimitada su manifestación política sobre todo en los períodos electorales. Una vez que estos quedan cerrados, la actividad se concentra

en el plano de los aparatos partidarios. Cuando los ciudadanos prolongan una actividad de cara al poder, imponen una presencia en otros códigos a los habituales. Esto es más propicio en tiempos de crisis sociales y políticas. Últimamente los movimientos cívicos han ido encontrando formas de expresión más constantes. Además hay crisis cuya duración es mayor a la que la política tradicional está acostumbrada. Si a la actuación de la ciudadanía que intenta expresarse autónomamente el gobierno responde con presiones, subordinaciones e intimidaciones, una dignidad reactivada experimenta una actuación en sentido distinto a la que quiere el poder. Hubo ocasión para otras percepciones de la relación entre gobernantes y gobernados. Los sometimientos disgustan. Los estilos tradicionales tanto gubernamentales como partidarios son puestos en cuestión. Sobre todo al poder gubernamental no le resultan tan operantes antiguos esquemas. Instrumentos antes exitosos muestran signos de descomposturas. Todavía corporativiza; pero ni una situación homogenizadora permite hacer entrar a todos los afectados en un mismo molde. La dominación prosigue, pero con acotamientos. La hegemonía se percibe como disputable. Tampoco las instancias partidarias permanecen como cauces privilegiados de expresión alternativa. Emergen búsquedas de otras manifestaciones organizativas, menos estructuradas y más flexibles. Se revalora lo cívico frente a otras entidades más restrictivas. No hay sujetos protagónicos únicos. La posibilidad pluralista aparece, y las convergencias



establecen los nuevos contactos. El repliegue, el desgaste inducen a interpretaciones que minimizan las alternativas innovadoras, pero hay ya un nuevo subsuelo político con capacidades de hacer emerger potencialidades cívicas. El desastre descompuso las formas tradicionales de dominio. Se vivió una nueva situación muy creativa desde potencialidades de la sociedad civil antes no imaginadas. Vino el reflujó, y el poder tradicional volvió a enseñorearse. Pero precisamente porque ese poder es el responsable último de muchos desastres evitables, y puesto que al no haber aprendido el significado del 2 de abril repite errores y pone en peligro a grandes sectores de la población, el cuestionamiento desde la sociedad civil se renueva y es capaz de presionar para instaurar formas de relación entre gobierno y sociedad más democráticas, participativas y efectivas para prevenir y evitar desastres. Mientras la sociedad no sepa qué pasó, por qué, quiénes son los culpables, cómo se pueden poner remedios ciertos a males acumulados que acechan continuamente, el gobierno queda cuestionado. Este, a su vez, por los entrapamientos de complicidades e impunidades provoca continuamente situaciones de ingobernabilidad. El mayor deterioro lo ha sufrido un poder incapaz de ofrecer situaciones de seguridad pública. Pese a sus tentaleos e inconsistencias la sociedad civil tendrá que aprender a encarar al poder y a diseñar formas de convivencia menos peligrosas. La acción civil no será masiva. Partirá de grupos que irán construyendo convergencias decisivas. **LA RED**